

José M. Roca

Inestabilidad estable o putrefacción y parálisis política

Querría poder amar a mi país y a la justicia al mismo tiempo.

Albert Camus: *Carta a un amigo alemán.*

1. Conservar la podredumbre

Desde muchos puntos de vista y en particular desde una posición democrática y solidaria, la coyuntura política que atravesamos en España es decepcionante; crece la riqueza, pero también lo hacen la pobreza y la desigualdad, y apesta el entorno del Gobierno.

La corrupción política, que junto a los estragos de la crisis económica es uno de los factores de deslegitimación del Régimen, sigue su curso imparable, pero es un fenómeno difícil de evaluar por la ausencia de datos, por el sigilo con que actúan sus beneficiarios, corruptores y corrompidos, y por el uso que hace el Partido Popular de los resortes del Estado para evitar que se descubran sus manejos y, en su caso, para eludir la acción de la justicia o paliar sus efectos.

Por lo que se va conociendo sobre los grandes y pequeños casos que le afectan, se percibe un *modus operandi* que se repite una y otra vez, por lo que cabe pensar que se trata de un procedimiento centralizado, aplicado localmente pero con el mismo propósito, que es financiar al partido y a la vez a muchos de sus dirigentes, que en estos turbios asuntos son realmente "emprendedores" muy imaginativos.

Algunas fuentes señalan que la corrupción más el despilfarro de dinero público derivado en muchas ocasiones de ella -los célebres "sobrecostos" por vulnerar las normas de contratación- pueden llegar al 20% del PIB. Pero hay algo tan grave como el ilegal extravío de dinero público hacia los bolsillos privados, que es la vulneración de las reglas del juego democrático al concurrir con tretas a los comicios, como es la sobrefinanciación irregular de las campañas electorales, rompiendo la igualdad de oportunidades entre los partidos concurrentes.

En el PP, como neoliberales, no se cansan de hablar cínicamente de competir y de asumir riesgos, pero prefieren asegurar los resultados electorales haciendo trampas. Es más, haciendo trampas antes y después, pues delinquen para llegar a gobernar y una vez en el gobierno delinquen para tapan la corrupción. Este es el círculo vicioso en que está inmersa la derecha desde hace décadas, cuyo poder político se ha establecido sobre victorias electorales ilegítimas.

Los casos de corrupción que salpican al Partido Popular, y son ya el caso del Partido, una asociación para delinquir, según algunos jueces, han aumentado en cantidad, cualidad, extensión y gravedad. Los casos grandes (Bárceñas, Gurtel, Púnica, Lezo, Taula, etc) aumentan y extienden sus ramificaciones y se ha descubierto de qué estaban rellenos los mandatos de Esperanza Aguirre y sus personas de confianza, tras su llegada a la Comunidad de Madrid arropada por el "tamayazo", el mayor golpe civil al régimen democrático, perpetrado (con éxito) después del fallido golpe militar del 23-F.

La corrupción no cesa, como tampoco cesa, pese a su ritual y demagógica alusión a la transparencia, la resistencia a depurar sus filas de indeseables y la tendencia de sus dirigentes a la opacidad y a demorar o impedir la acción judicial utilizando las instituciones del Estado (ministerios del Interior - policía "patriótica"- y de Justicia, judicatura y fiscalía) para buscar la impunidad a su conducta delictiva. Pero, lo que con mayoría absoluta podía hacerse, ahora, con mayorías relativas en la cámara central y en las autonómicas, se vuelve más difícil, pues, aún con tropiezos, los partidos de la oposición están poniendo en marcha comisiones de investigación, solicitando comparencias, logrando algunas dimisiones, promoviendo sesiones de reprobación o incluso presentando alguna moción de censura, que intentan acabar con la impunidad y el bloqueo impuestos durante los años de mayoría *absolutista*.

La situación se vuelve incómoda para el PP, que ha diseñado una operación estratégica para paliar los efectos de la aplicación de la ley sobre la abultada lista de personas en curso de investigación y otras que pudieran aparecer por casos que forman una amplia gama de dejaciones, abusos, faltas y delitos cometidos por sus militantes ocupando cargos públicos, operación que consiste en actuar de arriba hacia abajo, desde el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, para condicionar la actuación de jueces y fiscales. Pero la maniobra es tan grosera que ha merecido la comparencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Maza, y del fiscal anticorrupción, Manuel Moix (un fiscal no especializado en corrupción, pero "cojonudo", según la opinión de alguien que está en la cárcel por corrupto), en la Comisión de Justicia y luego la consiguiente reprobación, por primera vez, por el pleno del Congreso, con los votos afirmativos de todos los grupos (207 votos sobre 350) menos los del grupo Popular.

Ninguno de los comparecientes pareció darse por aludido, ni tampoco Rajoy, que

en la siguiente sesión del Congreso afirmó que mantiene su confianza en los reprobados. No le molesta el hedor que desprenden sus amigos. O sea, vale y, como primera providencia, mis leales, sin ningún rubor, colocan al recusado Enrique López en la sala de Apelación de la Audiencia Nacional y a Concepción Espejel -"Concha para los amigos" (del PP)-, en la presidencia de la Sala Penal, que se ocupa de los mayores casos de corrupción que afectan al partido del Gobierno. Y a otra cosa, mariposa.

En el Congreso la situación es compleja. Se ha terminado la mayoría absoluta (en realidad, absolutista) del PP, pero la actual correlación de fuerzas y la falta de disposición o de adiestramiento de los nuevos partidos (y el PSOE, en cierto modo también lo es) impide configurar mayorías para sacar adelante las leyes que espera una parte importante de la ciudadanía.

Ahora el hemiciclo tiene más vida y todo es menos previsible. Al Congreso llega mejor la opinión de la calle, han entrado en la cámara asuntos que antes estaban vetados por la actitud del Partido Popular, pero no basta, pues, para que en la sociedad se noten los cambios, debe haber, primero, nuevas leyes, y después que se apliquen, pero aún lo primero es difícil por los problemas que tienen los partidos para hablar y llegar a acuerdos mínimos.

Como producto de su juventud, dos de ellos están en una fase en que temen desnaturalizarse, o incluso traicionarse, si llegan a ciertos acuerdos con fuerzas que no son afines. En realidad, todos se tratan como adversarios a los que hay que batir y no como posibles aliados con los que hay que llegar a algún acuerdo para que sea verosímil su labor como oposición, porque a veces da la impresión que hacer de oposición es hacer de oposición a todos los demás partidos. Así hay proyectos de leyes que no salen adelante porque no hay acuerdos en los aspectos concretos, una docena de comisiones de investigación (¡bienvenidas sean!) esperan el acuerdo sobre sus componentes, sobre su presidencia o sobre

los comparecientes, y así sucesivamente. Entre tanto, Rajoy no cede, se escurre siempre que puede y utiliza el aparato institucional para resistir.

Da la impresión de que los partidos de la oposición no se ponen de acuerdo porque no han determinado qué es lo fundamental en esta etapa: si es echar al Gobierno o reformar lo que se pueda. Cierto es que determinadas reformas no podrán hacerse mientras Rajoy esté al frente del Gobierno y siga dócilmente las instrucciones de la Unión Europea, pero, sobre todo en Podemos, parecen no saber qué hacer ante una situación que no es la esperada, que era la de alzarse con la victoria y colocarse en el gobierno -que era poco creíble-, ante lo cual deben pasar al plan B, que no tienen. Mientras lo preparan siguen metidos en el regate corto, en lanzar iniciativas de escaso recorrido para marcar el terreno a posibles aliados, en librar escaramuzas que desgastan poco al Gobierno y en mantener un talante transgresor que empieza a parecer infantil.

Si se trata de cambiar algunas cosas, de llevar a cabo algunas reformas, aunque no tengan la profundidad deseada ni sean todas las que espera la gente, los partidos de la oposición deberían cambiar de actitud, lo cual es difícil de lograr por la situación que atraviesan, casi todos ellos inmaduros, incluso el PSOE, metido en un proceso de renovación que no se sabe cómo terminará.

Los dirigentes se mueven entre la presión de las bases y la opinión pública y el temor a pactar y desnaturalizarse y se percibe en ellos falta de comunicación consistente -no sólo titulares-, poca pedagogía política y escasa claridad en los programas, que siempre son un instrumento fundamental y más en tiempos de gran confusión, como son los actuales.

El programa señala el último objetivo, que es lo deseable, acota el campo de lo que es alcanzable de manera inmediata, y señala pasos para avanzar hacia los últimos fines cubriendo etapas, pero admitiendo que eso

también conlleva renunciaciones; señala el camino, que no es rectilíneo ni está exento de compromisos. Para no engañar a la gente con un fácil populismo, no basta con señalar la indignación que genera el insatisfactorio presente y oponer como alternativa un futuro idílico, hay que explicar que, ante la imposibilidad de alcanzar todo de golpe, mágicamente, avanzar en algunos aspectos implica renunciar a hacerlo en otros. Y ese tipo de argumentos forma parte de la educación política de la que estamos tan necesitados en este país.

Apoyado en algunas grandes cifras, las adversas no se mencionan, el Gobierno afirma que hemos salido de la recesión y que la economía crece, pero para no malograr el "éxito" alcanzado hasta ahora conviene seguir aplicando -a piñón fijo- las mismas recetas que nos han traído hasta aquí y, en este aspecto, los Presupuestos Generales del Estado que van a salir adelante son continuistas, pues prolongan un año más las medidas de austeridad que han generado los desastrosos efectos ya conocidos.

Hemos llegado hasta aquí dejando atrás, en la inseguridad perpetua y con una desigualdad creciente, a la cuarta parte del país, pero en el horizonte político no se perciben signos que anuncien una posible corrección de esta tendencia.

Nos arrastramos en la estabilidad de un país desestabilizado por los efectos de la recesión, de la corrupción, del despilfarro y la erosión de su clase política y por la obcecación de un gobierno desgastado, y sin embargo somos una sociedad resignada; un país plagado de carencias y frustraciones, dividido por la cuestión territorial y la desigualdad de rentas y oportunidades, pero anegado por la atonía y la impotencia ciudadana para impulsar un cambio que hace sólo dos años se sentía como iniciado, pero que hoy parece difícil de continuar y concluir.

A pesar de su evidente desgaste, de su pérdida de legitimidad, el régimen político forjado en la Transición resiste como el

hierro fundido, y el partido gobernante, que tanto ha hecho para llegar a este deterioro, presenta un talante pétreo a las sugerencias de cambio, con lo cual con esta obcecación continuista muestra una impronta franquista reconocible también en otros asuntos (Memoria histórica, Valle de los Caídos, Fundación Franco, nomenclatura del callejero, topónimos).

A los dirigentes del PP, herederos biológicos e ideológicos del franquismo, la democracia les viene grande; es un trámite necesario para llegar al poder, que merece todo el esfuerzo posible, incluso la financiación ilegal de las campañas electorales para competir con ventaja, pero después, alcanzado ese objetivo, es un estorbo del que conviene deshacerse, lo mismo que de la separación de poderes, pues piensan que en España deben seguir gobernando los de siempre y como siempre, es decir, sin dar cuentas a una gente que no las merece. Tal es su noción del poder y de la ciudadanía.

Debemos admitir que estamos en una etapa políticamente anómala, en que, tras casi un año con un gobierno en funciones, seguido luego por una legislatura muy breve, con el sistema de partidos reformado en parte (o conservado en parte), asistimos a las dificultades de una legislatura de transición, de duración incierta y resultados imprevisibles, que seguramente han de frustrar las expectativas del electorado que esperaba un pronunciado cambio de rumbo.

Los partidos de la oposición atraviesan una etapa transitoria, van camino de la madurez pero están faltos de sazón; en cierto modo, aún están "verdes". Dos de ellos, Podemos y Ciudadanos, como respuesta a la situación del país, fueron fundados apresuradamente y adolecen de la consistencia necesaria para actuar en una etapa como esta. Ciudadanos, desde la pretensión de ser un partido de centro que disputara un sector del electorado a Podemos, se ha redefinido como liberal y reformista, pero apoya al Partido Popular. Podemos, nacido como una inestable confederación de grupos, se está redefiniendo como partido, pero aún

no ha encontrado ni su identidad ni su lugar y oscila entre la radicalidad verbal y la transgresión gestual, pero, más allá del tacticismo, carece de una proyección estratégica verosímil. Le faltan un par de hervores, por lo menos, y le sobra el afán de protagonismo de su primer dirigente.

Respecto al PSOE, hay que decir que, tras un declive electoral que se remonta a la etapa de Zapatero y a la *oposición responsable* de Rubalcaba, se presenta remozado con la elección (reelección) de Pedro Sánchez a la Secretaría General, aunque tiene por delante la verdadera reunificación y la reorientación de su programa, arrumbado en la larga etapa de neoliberal desvarío siguiendo las consignas de la declinante socialdemocracia europea.

Finalmente, la Unión Europea, desde donde llegan las directrices en materia económica y financiera, también se encuentra en una fase de transición. Eso sin hablar de la primera potencia mundial, conducida de modo displicente por un obtuso y zafio millonario, que navega con rumbo incierto. Entre tanto, el Gobierno, utilizando los resortes del aparato estatal, gobierna con decretos y se defiende con reglamentos; resiste, pues el sistema está pensado para dotar de estabilidad a los gobiernos.

Férreamente construido para evitar vuelcos y resistir la presión social, la presión desde abajo, el sistema es oligárquico hasta la médula; está hecho para evitar urgencias y sobresaltos, demorar las decisiones y resolver sin prisa, como dueño del tiempo. Está diseñado para aguantar lo que le echen, que es la norma vital de Rajoy, por lo cual parece hecho adrede para él, como un traje cortado a medida para que se encuentre cómodo.

Por la resistencia de unos y la impotencia de otros, volvemos a tiempos pasados, cuando la tradicional ceguera de la derecha nacional, reacia a acometer las reformas que el país precisaba, dejaba pudrir la situación hasta que acababa con ella un pronunciamiento militar, un cambio de dinastía, una guerra carlista o lo intentaba un éfime-

ro gobierno progresista, que era pronto derribado por los partidarios de restaurar el viejo orden. Y vuelta a empezar, como el borrico de una noria, condenado a caminar sin moverse del sitio. Parece que hemos vuelto a la época de la agonía de la Restauración, al tiempo de bobos, del que hablaba Galdós.

2. Persiste la ofensiva contra las clases sociales subalternas

El proceso de desmantelamiento tiene que llevarse a cabo de forma disimulada y oculta. Y esa es la primera tarea política del líder político actual.

John Berger

Asistimos al publicitado espejismo de la recuperación de la economía, cuyo crecimiento se reparte de manera desigual -la brecha entre ricos y pobres, que separa el 20% de personas con los ingresos más altos, del 20% que los tiene más bajos, ha crecido el 28% (en la eurozona la media ha sido del 5%)-, que muestra un modelo productivo muy vulnerable a las variables exteriores, asistido por las muletas del Estado y el esfuerzo de los asalariados; un capitalismo de bajos salarios, elevada tasa de paro, horas extras no retribuidas, largas jornadas, precariedad laboral, rebaja de impuestos al capital (el 84% de la recaudación procede de las familias; sólo el 13% procede de las empresas) y tolerancia con la evasión fiscal.

El Gobierno sigue mostrando su preferencia por las clases altas, dominantes, pues reparte de forma desigual los resultados de la "recuperación": reduce los ingresos públicos -desde 2007 ha habido un recorte de 25.000 millones de euros- (España, con una presión fiscal del 38% del PIB, está 8 puntos debajo de la media europea), y mientras el IRPF (el impuesto personal por trabajar) y el IVA (el impuesto directo por consumir) han recuperado en 2016, con menos habitantes, menos cotizantes y menos consumo, el nivel de recaudación de 2007, el impuesto de sociedades, que grava

el beneficio del capital, ha quedado por debajo del 50% de entonces (45.000 millones de euros ingresados en 2007; 22.000 millones en 2016). Como un efecto de la reducción de ingresos (la gran coartada), año tras año menguan los fondos públicos destinados a gasto social.

Hemos rescatado bancos por valor de 61.000 millones de euros (Bankia se ha llevado 23.000 millones), pero la cantidad comprometida es de 122.000 millones entre aportaciones privadas y públicas (es de temer que nunca conozcamos la cifra real desembolsada), no obstante se anuncia una ayuda de 1.100 millones más en este año.

El Gobierno ha indemnizado pronto y bien, con 1.350 millones de euros, a ACS por suspender el proyecto "Castor", que tendrá un coste final de 2.400 millones para los usuarios, y reserva 3.500 millones para rescatar 8 autopistas de peaje, porque las empresas concesionarias no han ganado lo que pensaban, mientras España figura a la cola de Europa en inversión pública (un 58% menos que en 2009; en 2016, en I+D+i se gastó la tercera parte del presupuesto ya recortado).

El Estado ha subvencionado durante la crisis a grandes empresas (entre ellas a las de telefonía y al sector del automóvil) y beneficiado al monopolio eléctrico con el "impuesto al sol" y autorizando drásticas subidas de tarifas en el consumo doméstico. Por lo cual cabe deducir que, en España, tenemos ("padecemos") una clase empresarial con actitudes feudales respecto a los trabajadores, que necesita mimos para actuar y sólo invierte con halagos y pocos riesgos, y que soportamos un capitalismo de amigotes que precisa la favorable disposición del Estado para funcionar con mediocre rendimiento pero con gran eficacia para recuperar beneficios.

A día de hoy, la deuda pública sigue aumentando. Tras tres años seguidos de ascenso, en marzo alcanzó los 1,129 billones de euros, 32.523 millones más que en marzo del año pasado, la mayor cantidad

acumulada de nuestra historia. Según el Ministerio de Economía, en 2017 la deuda estará en el 100,3% del PIB, por encima del 98,8% enviado a la Unión Europea (por si colaba). Los intereses de la deuda serán de 32.000 millones de euros. Razón por la cual los sacrificios padecidos estos años han sido baldíos, si es que pretendían reducir la deuda y que bajara la temida "prima de riesgo" (el porcentaje por encima de la prima alemana), que ha descendido desde 638 puntos en 2012 a 120 con una deuda creciente. Pero no, lo que buscaban las medidas de austeridad no era tanto rebajar la deuda pública como la privada y rebajar los niveles de vida y consumo de esos españoles que tanto preocupan a Rajoy e instaurar un capitalismo aún más salvaje, donde la precariedad y la pobreza sirvan para disciplinar a los trabajadores (que también son españoles) haciendo del empleo una precaria pero apetecible meta, un premio aleatorio en manos patronales, que puede ser concedido o arrebatado según la voluntad del empleador, al interpretar de modo unilateral los leoninos contratos salidos de la reforma laboral de 2012. Con ellos, siete millones de trabajadores están bajo el umbral de la pobreza, que el INE sitúa en una renta de 8.000 euros anuales (666 euros al mes). La patronal española entiende la competitividad al estilo del viejo Manchester, que conoció Engels y de los relatos de Carlos Dickens, precarizando el empleo, alargando la jornada laboral, bajando los salarios y los impuestos al capital.

Respecto al desempleo, el ministro de Economía asegura que desde el 19% de la población activa en 2016, el paro descenderá al 11% en 2020 (ya veremos). Recordemos que en 2007 era el 8% de la población activa. Con una tasa de temporalidad del 26% (entre los jóvenes, del 73%), España es el segundo país de la UE con la tasa más alta; la tasa media europea de temporalidad es del 14 por ciento.

El número de millonarios ha aumentado durante la crisis y ha crecido la cuantía de las grandes fortunas. Hay 40 familias que

poseen un patrimonio superior a mil millones de euros. En 2016, el patrimonio de las 100 familias más ricas del país sumaba 198.425 millones de euros, 9.175 millones más que en 2015. La suma de las cinco mayores fortunas -Amancio Ortega es el primero- asciende a 99.212 millones de euros. La fortuna de tres personas equivale a la riqueza que posee el 30% más pobre del país (14 millones de personas). El último año se han generado 7.000 nuevos millonarios, casi 20 al día, según Intermón.

La riqueza escapa de las rentas medias y bajas y se refugia en las altas: el 10% de la población más rica atesora el 56% de la riqueza nacional, el 30% de las rentas más bajas ha perdido el 20% de sus ingresos, mientras las medias han perdido casi un 7% y las altas han ganado. La renta media de las familias ha pasado de 28.000 euros al año en 2007 a 22.000 en 2013, un 20% menos en seis años. El 62% de los asalariados tiene ingresos inferiores a 22.400 euros anuales (14 pagas de 1600 euros).

Según los niveles de renta, en 2007, el 60% de la población pertenecía a la clase media, el 27% a la clase baja y el 13% a la clase alta. Seis años después, la clase alta era el 9%, la clase media era el 52% (había perdido 8 puntos, 3,5 millones de personas, y estaba en 24 millones de personas) y la clase baja había pasado a representar el 39% de la sociedad, en 2013. España sufre un rápido proceso de proletarianización.

Lo cual no es accidental sino fruto de un proyecto perseguido con tesón y aplicado con saña por el Gobierno, que actúa como un paladín de los estratos altos y económicamente acomodados contra los estratos bajos y débiles, cuya precariedad no ha dejado de aumentar.

Entre 2009 y 2015, la renta media de los hogares se redujo un 13%; hay 1.400.000 hogares con todos sus miembros en paro, 720.000 hogares carecen de cualquier ingreso (en 2007 eran 400.000 (Intermón); 500.000 están en pobreza severa y uno de cada diez sufre de pobreza energética. Entre 2008 y 2015, el 20% de los hogares

más pobres, tras hacer frente a los gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, crédito), ha perdido el 44% de la renta disponible. El 50% de los parados carece de subsidio de desempleo. Según la red Europea contra la pobreza y la exclusión (EAPN), tres millones y medio de personas sobreviven con menos de 350 euros al mes. Casi dos millones de niños pasan hambre o reciben una nutrición insuficiente.

Las clases sociales económica y políticamente más débiles, los necesitados de hoy, como las llamadas "clases humildes" antaño, a medida que las prestaciones del Estado se recortan son objeto de la caridad. La "Tómbola de la vivienda" y las labores de punto de las damas del ropero de San Vicente de Paúl no están muy lejos de esta nueva sociedad que reproduce viejos comportamientos de clase que sustituyen el compromiso público -el mediocre Estado social que hemos tenido- por iniciativas privadas en favor de la caridad. La solidaridad nacional como propósito para mantener universales garantías de vida va siendo arrinconada por acciones particulares para paliar, que no suprimir, carencias personales; en todo caso, la ayuda y la promoción son individuales, ya que ha desaparecido la posibilidad de la promoción social colectiva, pues la igualdad de oportunidades para todos se revela una quimera.

Las medidas económicas, acompañadas por el recorte de derechos laborales, civiles

y medidas de excepción (ley mordaza, criminalización del sindicalismo) puestas en práctica estos años, han causado estragos entre quienes viven de rentas medias y bajas, lo que ha generado que casi 3,5 millones de personas hayan dejado de pertenecer a la clase media para descender de categoría en la escala social, mientras una parte importante de la clase trabajadora, la peor formada profesionalmente, se ha precipitado en las simas de la precariedad y la exclusión como permanentes condiciones de vida.

El Gobierno, el mismo gobierno que ha provocado el desastre y se ofrece ahora como la solución, ha introducido en el Estado el sesgo autoritario necesario tanto para proteger al Partido Popular de la acción de la justicia por la corrupción como para provocar en la sociedad española una brutal recomposición social, producto de un diseño de ingeniería de inspiración financiera, sin que eso haya suscitado la correlativa reacción, radical e incluso virulenta, por parte de los grupos sociales afectados, ante lo cual cabe preguntarse por qué. ¿Cuáles son las causas de la templada respuesta a la agresión perpetrada? ¿Cuáles son las causas de la pasividad ciudadana? ¿Por qué razones la polarización económica y social se ha trasladado tan débilmente a la representación política?

Las respuestas a estas preguntas quedan para otro día.

Todos los partidos que no lleven propuestas concretas para acabar radicalmente con los desahucios y con la pobreza extrema deberían ser expulsados por los electores al infierno político. Sólo acabar con esas dos cosas justifica un cambio de gobierno, un cambio de partidos. Vivir sin miedo al desahucio, sin miedo a ver cómo desahucian a tus vecinos, vivir sin temor a no tener absolutamente nada que comer, eso sería ya un cambio real (y queremos muchos más) Pero para que eso sea posible, tenemos que librarnos de este partido negro, heredero de lo peor del franquismo, y de su crueldad gratuita. **Ya basta.**

Beatriz Gimeno, 5/3/2015

http://www.eldiario.es/zonacritica/basta_6_363323690.html